

FINANZAS



Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, candidatos de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, respectivamente.

La suma de escándalos como las preferentes, los desahucios, las cláusulas suelo o las tarjetas *black* ha metido de lleno a la banca en los programas electorales. Por eso, la estrategia de todos los partidos políticos pasa por incluir al sector financiero no sólo como parte de sus propuestas económicas, sino en su futura política social. La diferencia radica en si están dispuestos a hacerlo con

nuevas leyes que protejan al cliente, como proponen el PSOE o Unidad Popular-Izquierda Unida (UP-IU), más allá de códigos de buenas prácticas. Respecto a Bankia, será pública sólo si gana Podemos. Ciudadanos se atreve con la expropiación de pisos a las entidades, mientras que el PP propone nuevas medidas para evitar desahucios, después de los 200.000 de esta legislatura.

Podemos propone una Bankia pública; el PSOE, acabar por ley con las cláusulas suelo; Ciudadanos, expropiar pisos a las entidades, y el PP 'se acuerda' de los desahuciados

La banca, un arma electoral social

■ Esmeralda Gayán

Las cláusulas suelo, las tarjetas 'black' o los desahucios han marcado la legislatura que ahora concluye. La pérdida de la confianza de los ciudadanos en los bancos en estos cuatro años es un hecho, tras el escándalo de las preferentes, en el que se vieron afectadas unas 800.000 personas.

Todos estos temas, que en pasados comicios no aparecían en las campañas, están recogidos en los programas electorales que aspiran a gobernar España tras el 20 de diciembre, aunque con distintos enfoques.

Así, Podemos es el partido con unas apuestas más rupturistas con el actual *status quo* del sector financiero. La formación que lidera **Pablo Iglesias** propone la separación de la banca minorista y la banca de inversión "para evitar situaciones de riesgo moral en las que las actividades especulativas vinculadas a la

banca de inversión puedan amenazar la solvencia de los depósitos minoristas y, con ello, exigir rescates públicos a posteriori".

Además, en caso de gobernar, crearía lo que denomina "un impuesto de solidaridad" sobre los beneficios de las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, para recaudar 5.000 millones anuales.

El partido morado también es partidario de una banca pública a partir de las entidades nacionalizadas **Bankia** y **Banco Mare Nostrum**, además de convertir a la Sareb o el "banco malo" en un instrumento de gestión de un parque público de vivienda en alquiler.

El **PSOE** no habla de banca pública, sino de "no malvender Bankia". En su caso, apuestan por que la privatización de la entidad se lleve a cabo "de acuerdo con las autoridades europeas, en el momento que permita recuperar todo o la mayor parte del valor invertido por el Esta-

do", en línea con la propuesta de los populares.

Mientras tanto, un hipotético gobierno de **Pedro Sánchez** apoyaría la actual gestión "dirigida a convertir a Bankia en un banco comercial ejemplar, de modo que su modelo de negocio y su gestión sea referencia para todas las entidades financieras españolas".

La formación del puño y la rosa impulsaría la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), "tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España",

Todos los grandes partidos, excepto el PP, proponen crear un parque público de vivienda social de alquiler al que puedan acogerse familias desahuciadas

un impuesto que incluirá el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y derivados, para desincentivar la especulación financiera.

Por otra parte, los socialistas proponen revisar y reforzar los esquemas de protección de inversores y consumidores de servicios financieros, "para recuperar la confianza de los ahorradores". Para ello proponen unificar los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) a los que pueden acudir los clientes e inversores en única Autoridad de Protección Financiera y resolución de disputas. "Este nuevo servicio, a diferencia de los actuales, tendrá capacidad de emitir, a instancias de los consumidores perjudicados, dictámenes vinculantes para las entidades financieras, según el modelo británico".

El **PSOE** eliminaría en caso de gobernar "de forma automática por

parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca" las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

También reformaría la ley de segunda oportunidad "para, por un lado, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo". En este sentido, excluye de la ejecución los avales que se hayan podido producir en estos casos la vivienda habitual del avalista.

Unidad Popular también defiende la "necesidad" de cambiar las leyes para "garantizar la vivienda a quienes más sufren" y lograr "cero desahucios" "Mientras rescatan bancos están desahuciando a personas, están llevando a las clases populares a la miseria", ha lamentado su líder, **Alberto Garzón**.

En cambio, en el programa del Partido Popular no aparece la palabra "desahucio". Después de las casi 200.000 ejecuciones hipotecarias en su legislatura y del fracaso del **Código de Buenas Prácticas**, el partido conservador propone ahora reformar la ley concursal "para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable".

PP, sin rastro de Bankia

Los populares no hablan de Bankia en su programa, aunque su estrategia es bien sabida. Tal y como ha repetido numerosas veces el titular de Economía, **Luis de Guindos**, pasa por vender cuando se pueda y consiguiendo recuperar parte del rescate.

El partido que encabeza **Mariano Rajoy** dedica en cambio buena parte de su programa a proponer instrumentos de financiación empresarial alternativa - al igual que todas las formaciones - como el capital riesgo, el capital semilla o la actuación de los denominados *business angels*, "eximiendo de tributación las operaciones de ampliación de capital de estas inversiones".

Ciudadanos, por su parte, no tienen ningún punto en su programa sobre el sistema bancario como tal, ni explica querían hacer con los bancos nacionalizados. El partido naranja se centra en abordar asuntos como eliminar las cláusulas suelo o retasar las viviendas de los hipotecados.

La formación de **Albert Rivera** aborda el drama de los desahucios y propone, entre otras cosas, expropiar las viviendas a los bancos durante un plazo máximo de tres años. Esta medida es la misma que la **Junta de Andalucía**, a instancias de **Izquierda Unida**, anunció en 2013 y que dos años más tarde tumbó el Tribunal Constitucional.

"Las personas en especiales circunstancias de emergencia social podrán ser beneficiarias de la expropiación forzosa a la entidad financiera del uso de la vivienda durante un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente". Así lo recoge el partido naranja en el bloque dedicado a las Políticas Sociales de su programa que señala también que "el beneficiario satisfará una parte del justiprecio". Se compromete a proteger "a los niños y a las familias frente a los desahucios y desalojos". Para ello, favorecerá "la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, prioritariamente de las numerosas, monoparentales y con discapacitados".

Todos se apuntan a controlar las Sicav

■ A La batalla por la que todos los partidos pugnan con dureza son las sociedades de inversión colectiva (Sicav).

El **Partido Popular** pretende modificar el régimen de estas sociedades para garantizar su carácter colectivo. Según su propuesta, sólo se computarán a efectos del número de los 100 accionistas los que tengan una participación superior al 0,55%.

Para garantizar un mayor control de las sicav, el **PSOE** propone hasta tres iniciativas: establecer un porcentaje de participación máxima para cada inversor, valorar la fijación de un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen y dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las sicav.

Por su parte, el mayor control de las sicav

Ciudadanos lo vislumbra desde dos ángulos: el control de su carácter abierto para que sean efectivamente de naturaleza colectiva de manera que cualquier ciudadano pueda invertir en ellas en las mismas condiciones que los dueños reales de las sicav y un control fiscal por la Inspección de Hacienda.

El plan de **Podemos** en torno a las sicav pasa por incardinadas dentro de la lucha contra el fraude

fiscal eliminando las pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas y revisar su fiscalidad. Para ello, el partido que lidera **Pablo Iglesias** busca que dejen de tributar al 1% y su tributación se equipare al impuesto de patrimonio, aplicándose el tipo máximo contemplado por dicho impuesto; que se establezca un periodo de permanencia máximo para las plusvalías acumuladas y un porcentaje de

participación máximo para cada inversor y que se atribuya a la AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos arbitrándose un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas.

Curiosamente, en lo relativo a fondos de inversión ninguno de los cuatro partidos políticos ha hecho ninguna propuesta concreta, ni tampoco en lo que respecta a los planes de pensiones.